

Santiago, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Reclamación: Que, DAGOBERTO MARCELO RAMOS AVENDAÑO, abogado, cédula nacional de identidad N° 10.155.205-5, en representación según mandato judicial de la empresa PFA SEGURIDAD SPA, RUT 77.066.699-6 del giro de la seguridad privada, con domicilio en Fontt N° 45, oficina H-1, Colina, dedujo conforme a lo dispuesto por los artículos 500 y 504 del Código del Trabajo, Recurso de Reclamación en Procedimiento Monitorio, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, representada por doña MÓNICA LIBERONA PÉREZ, Inspectora Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, ambos domiciliados en Manuel Antonio Matta N° 1231, Quilicura, Santiago.

El recurso se dedujo por la Resolución Administrativa N° 06, de 13 de enero de 2023 y notificada por correo electrónico con fecha 19 de enero de 2023, entendiéndose legalmente practicada la notificación al tercer día hábil, es decir al 23 de enero de 2023, la que negó lugar a la Reconsideración administrativa deducida por esta parte en contra de la multa N° 1323.3655.22.46-1-2 de 20 de julio de 2022, cursada por 18 UTM totales, solicitó que la referida Resolución sea dejada sin efecto y conjuntamente con ello, las multas que se han confirmado sea dejadas íntegramente sin efecto o rebajadas proporcionalmente.

Respecto a la **MUTA N° 2:** No consignar por escrito en el contrato de trabajo o en documento anexo la modificación de la estipulación referida a la entrega del beneficio de colación y movilización respecto del trabajador Osvaldo Eduardo Carvajal Lorca contrato de trabajo señala que pagará movilización de \$10.000.- colación \$10.000 en los meses de 09/2021 pagó la suma de \$75.808, el 10/2021 pago \$85.808, en 11/2021 pago \$98.660 y en 12/2021 pagó \$55.159.

Al respecto indicó que el primer error de hecho del Inspector del Trabajo al resolver: no reconocer el efecto de la Prescripción extintiva de responsabilidad infraccional, pues no ha considerado que tanto la jurisprudencia constitucional, administrativa y judicial siguen la tesis de la identidad ontológica entre sanciones penales y administrativas, bajo la idea de un concepto metanormativo de un único poder punitivo del Estado. A su vez, se reconoce implícitamente que dentro de este marco, corresponde al legislador valorar desde un punto de vista ético-social las conductas punibles y determinar la conveniencia que estas sean aplicadas por la autoridad judicial o administrativa. Además, en esta función el legislador debe ponderar, sobre la base del principio de proporcionalidad, los medios utilizados en relación con los fines constitucionales que se pretenden alcanzar y la intensidad de la afección de los derechos fundamentales. En definitiva, para nuestra doctrina y jurisprudencia, las infracciones y sanciones administrativas participan de la misma naturaleza de los delitos y las penas, pues integran un mecanismo de intervención en el marco de una política represiva que debe determinar el legislador, sujeto a elementos de proporcionalidad y garantías que son de mayor intensidad considerando la gravedad de la



sanción que se va aplicar. Expuso que sobre la base de estos conceptos, se solicitó al Sr. Inspector, la aplicación de uno de los principios básicos del ius puniendi cual es el de la prescripción de la potestad sancionadora del Estado y en base a estos últimos dejar sin efecto la multa presente. Para ello se le solicitó considerar que el reproche infraccional que se describe en la resolución de multa data de los meses de septiembre a diciembre de 2021 y que su representada recién fue notificada de la resolución de multa con fecha 02 de septiembre de 2022, es decir, MÁS DE 11, 10, 9 y 8 MESES DESPUÉS, respectivamente desde el presunto hecho infraccional.

Refirió que para considerar el petitorio anterior, el Inspector del Trabajo debió atenerse al siguiente Dictamen aclaratorio de Contraloría General de la República, a saber, N° 14.571 de 22 de marzo del año 2005, el cual expuso con toda claridad que la prescripción de las infracciones administrativas, se ajusta a las reglas de prescripción de las faltas en materia penal, esto es, en el lapso de seis meses contados desde que se ha cometido la infracción. Ha dicho el ente contralor: "Puntualizado lo anterior, debe anotarse que, tal como lo han sostenido la jurisprudencia de la Contraloría General en su Dictamen N° 50.013 bis de 2000, y la doctrina existente sobre la materia, la potestad disciplinaria es una manifestación de la potestad sancionatoria del Estado, la que, a su vez, es junto a la potestad punitiva penal, una de las manifestaciones del ius puniendi general del Estado, razón por la cual ha entendido también que los principios del derecho penal son aplicables al derecho sancionador disciplinario. "Como se manifestó en dicho dictamen, así lo reconocen numerosos autores, entre los que se encuentra Miguel Sánchez Morón, según el cual "la doctrina y la jurisprudencia, salvo excepciones, vienen insistiendo últimamente en que todas las manifestaciones punitivas del Estado, incluidas las que confiere el derecho disciplinario, tienen un fundamento común, se explican y justifican en virtud de un mismo ius puniendi, de donde se deduce que les son aplicables grosso modo los mismos principios y reglas, por lo general extraídas de la dogmática del derecho penal" (Miguel Sánchez Morón, Derecho de la Función Pública, Editorial Tecnos SA., Madrid, 1996, p. 263). Indicó que el transcurso del tiempo, sin que el ilícito administrativo haya sido perseguido, hace cesar la potestad represiva del Estado. Hablamos aquí de una hipótesis de caducidad o preclusión, en que el ejercicio de las potestades sancionadoras aparece impedido para el caso concreto, pues aparece del todo claro que habiéndose cometido la presunta infracción con tope al 31 de diciembre de 2021, la potestad sancionadora de las faltas no se puede extender más allá de los 6 meses subsiguientes, como se ha pretendido en la especie, al haberse notificado la multa a su representada con fecha 02 de septiembre de 2022, fecha esta última de la materialización del acto punitivo de multa. Agregó que el principio de garantía penal, también informante del orden administrativo sancionador, requiere aplicar a éste el instituto de la prescripción, tanto para excluir la incertidumbre que generaría una indefinida potestad persecutoria de las infracciones, cuanto porque no cabe dispensar al infractor administrativo un trato más gravoso que el que se dispensa a un delincuente o



criminal, apuntó que este es el parecer de nuestra Excma. Corte Suprema de Justicia, expresado en fallo de Casación del 06 de octubre de 2012 (Rol 6772-2009).

Refirió que en conformidad a lo expuesto el Inspector del Trabajo debió reconocer en su resolución, que la potestad sancionatoria de este organismo por una infracción administrativa cometida por su representada en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, sólo podía extenderse hasta el 30 de junio de 2022, habiéndose llevado a cabo la fiscalización con fecha 20 de julio de 2022 y habiéndose notificado la resolución de multa con fecha 02 de septiembre de 2022, es decir, en ambos supuestos, más allá del plazo legal de 6 meses de prescripción de la responsabilidad infraccional, de manera que al hacerlo más allá del plazo de 6 meses, lo ha hecho sobre una potestad prescrita en lo particular y así debió reconocerse, de manera que al no hacerlo así el Inspector del Trabajo ha incurrido en error de hecho que es menester enmendar por esta vía

Como antecedente adicional, se expuso al Inspector del Trabajo, que el trabajador Sr. Carvajal Lorca finalizó su relación contractual con esta empresa con fecha 18 de julio de 2022, tal como se acreditó con su carta de autodespido, de manera que la potestad sancionatoria de la reclamada y a su respecto, sólo se extendía hasta el 18 de enero de 2022 y no más allá como lo ha hecho.

Respecto a la **MULTA N° 1**: “No pagar íntegramente las regalías consistentes en colación y movilización por los montos estipulados en el contrato de trabajo, respecto de los trabajadores y períodos que se indican:

1.- Angélica Inés Bastías Díaz contrato de trabajo señala que se pagará movilización de \$30.000, en los meses de 09/2021 a 11/2021 pagó la suma de \$25.808, en 12/21 pagó \$21.523, en 01/2022 pagó \$7.432, en 02/2022 pagó \$20.779, en 03/2022 pagó \$11.881 y en 05/2022 pagó \$9.375.

2.- Víctor Hernán Benítez Morales contrato de trabajo señala que pagará movilización de \$57.000 y colación de \$57.000 en 04/22 pago \$64.548, en 05/2022 pagó \$54.880 y en 06/2022 pagó \$59.712.

3.- Ricardo Cisterna Bahamonde contrato de trabajo señala que pagará movilización de \$10.000 y colación \$10.000 en 05/2022 pagó \$10.280 y en 06/2022 pagó \$637.

4.- Jordan Leandro Vásquez Jiménez contrato de trabajo señala que pagará movilización de \$10.000 y colación \$10.000 en 12/2021 pagó \$0, en 01/2022 pago \$6.903, en 02/2022 pagó \$14.269, en 03/2022 pagó \$6.903.

Señaló que en lo que a esta multa se refiere ha incurrido en error de hecho el Inspector del Trabajo al resolver por cuanto, en estricto rigor con los fundamentos expuestos respecto de la multa N° 2 analizada precedentemente, debió declararse PRESCRITA la responsabilidad infraccional de su representada y por ende PRESCRITA la potestad sancionatoria de la reclamada, por los siguientes períodos:



1.- Angélica Inés Bastías Díaz, en los meses de 09/2021 a 11/2021, 12/21, 01/2022 y 02/2022.

2.- Jordan Leandro Vásquez Jiménez, en los meses de 12/2021, 01/2022 y 02/2022.

Refirió que por otro lado, ha incurrido en error de hecho el Inspector del Trabajo al conformar la multa presente respecto del trabajador Víctor Benítez Morales, ya que no es efectivo que en los períodos que indica no se hayan pagado ÍNTEGRAMENTE las regalías que indica, ya que incluso y tal como se demostró, en la mayoría de dichos períodos se le pagó más de lo contractualmente acordado. De hecho, el sólo promedio de los períodos fiscalizados arrojaba que al trabajador Sr. Benítez se le pagaron por estos conceptos la suma de \$59.713.- por sobre los \$57.000.- acordados, de manera que no es efectivo y constituye un error de hecho el argumentar que el pago respecto de este trabajador no haya sido íntegro. Lo fue y en exceso.

Señaló que se ha incurrido en error de hecho el Inspector del Trabajo al resolver, por cuanto no ha considerado que tal como lo indican los contratos de trabajo de los trabajadores Angélica Bastías Díaz, Víctor Benítez Morales, Ricardo Cisterna Bahamonde y Jordan Vásquez Jiménez, su representada les garantizó una remuneración líquida establecida en los mismos contratos, de manera que la fluctuación positiva o negativa de estas asignaciones, respondió al hecho de poder arribar con las mismas al exacto monto líquido ofrecido, de manera que la remuneración líquida de los trabajadores nunca en todo estos períodos de tiempo ha experimentado menoscabo alguno, tal como se acreditó con las respectivas liquidaciones de remuneraciones. Es por ello que en virtud de todos estos argumentos la presente multa debió quedar sin efecto o reducida proporcionalmente, de manera que al no hacerlo así el Inspector del Trabajo, ha incurrido en error de hecho que es menester enmendar por esta vía.

Según lo expuesto, razonamientos invocados, jurisprudencia administrativa citada y según lo dispuesto por los artículos 500, 503, 504, 511 y 512 del Código del Trabajo, solicitó que la Resolución reclamada sea dejada sin efecto por y que las multas que se han confirmado sean dejadas íntegramente sin efecto o rebajadas proporcionalmente, con costas.

SEGUNDO: Audiencia de preparación: Que, se llevó a cabo audiencia única de contestación conciliación y prueba con fecha 22 de marzo de 2023, a la comparecieron ambas partes, donde se contestó la reclamación; se tuvo fracasada la conciliación, y se recibió la causa prueba y se ofrecieron las probanzas pertinentes, realizándose las correspondientes observaciones.

TERCERO: Contestación del reclamo: Solicitó que el reclamo fuere rechazado con costas, indicó que la reconsideración administrativa no fue acogida por no haberse acreditado el error de hecho ni la corrección de la norma infringida, contempladas en las hipótesis de los números 1 y 2 del artículo 511 del Código del Trabajo.



Indicó que la litis se ha trabado respecto de la facultad de la Inspección del Trabajo para dejar sin efecto, rebajar o mantener, las multas administrativas, por lo que los puntos de prueba deberían versar sobre el cumplimiento del artículo 511 citado y la forma en que se acreditó, no sobre la acreditación de los hechos contenidos en la multa, ya que, según lo dispone el 503 del Código del Trabajo, al haberse deducido la reconsideración administrativa por el reclamante, aquella facultad se ha extinguido.

Indicó que en la primera multa se aplicó en virtud del artículo 55 inciso 1 y 506 del Código de Trabajo y la segunda multa esta descrita en el artículo 11 y 506 del Código del Trabajo.

Hizo presente la presunción de veracidad de los actos administrativos y la carga de la prueba del actor.

Refirió que la reclamante ha sostenido la prescripción de la multa en el plazo de 6 meses, sin embargo la Dirección del Trabajo ha establecido que el plazo de prescripción de 5 años y no de 6 meses lo que coincide con la Jurisprudencia de la Contraloría General de la Republica.

En cuanto a la petición de rebaja fue desestimada ya que no se acreditó la corrección de los vicios.

Respecto a los hechos alegados en la reclamación, se deben rechazar las alegaciones de la demandante.

Refirió que la empresa no alega nada en relación a la resolución reclamada sino que los argumentos dicen relación con las multas, por lo que debería rechazarse.

Insistió en que la resolución reclamada, se tuvo en consideración la Jurisprudencia actual de la Contraloría General de la Republica y lo asentado por la Dirección del Trabajo estiman que el plazo de prescripción es de 5 años y no 6 meses.

Refirió que la prescripción es un error de derecho y no de hecho, que el reclamante debió accionar en conformidad a lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo, camino que no tomó.

Indicó que no existió error de hecho y tampoco una corrección de la infracción, solicitó el rechazo de la reclamación en todas sus partes.

CUARTO: Hechos controvertidos: Oídas las partes se fijaron dos puntos de prueba:

1.- Si respecto de la resolución que se pronunció sobre la reconsideración de la multa concurrió alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 511 del Código del Trabajo.

2. Antecedentes presentados a la solicitud de reconsideración administrativa algo que indicar Respecto a los puntos de prueba parte reclamante

QUINTO: Prueba de la reclamante: Durante la audiencia, la reclamante incorporó los siguientes medios de prueba:

Prueba documental:

1.- Carta de autodespido del Sr. Osvaldo Carvajal Lorca, de fecha 18 de julio de 2022.

2.- Resolución Administrativa N° 06, de 13 de enero de 2023, dictada por el Inspector Comunal del Trabajo.

3.- Copia de Dictamen N° 14.571 de 22 de marzo de 2005, de Contraloría General de la República.

SEXTO: Prueba de la reclamada: Durante la audiencia, la reclamada incorporó **prueba documental** consistente en:

1. Copia simple de caratula de informe de fiscalización N°490 junto con su correspondiente informe de exposición suscrito por fiscalizador actuante don Edmundo Issi Padilla.

2. Copia simple de resolución de multa N° 3655/22/46 de fecha 20 de julio de 2022.

3. Copia simple de correo electrónico de fecha 30 de agosto de 2022 con notificación de multa administrativa.

4. Copia simple de solicitud reconsideración de multa administrativa N°3655/22/46 ingresada en Dirección del Trabajo con fecha 18 de octubre de 2022, con anexo de fundamentación y antecedentes acompañados en solicitud.

5. Copia simple de Resolución N° 06 de fecha 13 de enero de 2023.

SÉPTIMO: Observaciones a la prueba: Al finalizar la audiencia, ambas partes formularon observaciones a la prueba, tal como consta en el registro de audio.

OCTAVO: Objeto de la causa: Que, el asunto sometido a la decisión de este tribunal se centra en determinar si concurren las hipótesis contempladas en el artículo 511 del Código del Trabajo, esto es, si en la resolución que resolvió la reconsideración administrativa planteada por el reclamante rechazándola, resultaban aplicables los números 1 y 2 del artículo citado.

NOVENO: Indicó la reclamante que la autoridad administrativa incurrió en un error de hecho al aplicar las multas pues éstas estaban prescritas, para fundar su pretensión acompañó Copia de Dictamen N° 14.571 de 22 de marzo de 2005, de Contraloría General de la República, que señala la potestad disciplinaria es una manifestación de la potestad sancionadora del Estado, la que, a su vez, es junto a la potestad punitiva penal, una de las manifestaciones del ius puniendi general del Estado, razón por la cual ha entendido también que los principios del derecho penal son aplicables al derecho sancionador disciplinario. Asimismo, en aquellos casos en que no exista un texto legal claro e inequívoco, procede aplicar por analogía instituciones correspondientes a otras ramas del derecho para resolver situaciones no regladas expresamente, de manera que los principios del derecho penal son aplicables en materia sancionadora, lo que se confirma en temas tales como la irretroactividad de las normas sancionadoras.. atendida la inexistencia de norma especial que regulen la prescripción de las infracciones en la materia consultada, la consideración del principio básico de la seguridad jurídica y la garantía constitucional relativa a la igual

protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas para la aplicación de las sanciones que administrativamente disponga...ese organismo debe tener en consideración las normas pertinentes sobre prescripción establecidas en el derecho penal. considerando que el código penal establece plazos de prescripción distintos según se trate de faltas, simples delitos o crímenes y que resulta inadmisibile asimilar para estos fines las infracciones de que se trata a crímenes o simples delitos, el plazo de prescripción que corresponde aplicar para tales infracciones es el fijado para las faltas en el art/94 del código penal, esto es, el plazo de seis meses “Puntualizado lo anterior, debe anotarse que, tal como lo han sostenido la jurisprudencia de la Contraloría General en su Dictamen N° 50.013 bis de 2000, y la doctrina existente sobre la materia, la potestad disciplinaria es una manifestación de la potestad sancionatoria del Estado, la que, a su vez, es junto a la potestad punitiva penal, una de las manifestaciones del ius puniendi general del Estado, razón por la cual ha entendido también que los principios del derecho penal son aplicables al derecho sancionador disciplinario.

Al tiempo que la reclamada, haciéndose cargo de las alegaciones de la demandante señaló que la resolución recurrida se pronunció sobre la prescripción y resolvió este punto de derecho de conformidad con lo dispuesto en el Dictamen 1000/009 de fecha 19 de marzo de 2021, que fijó doctrina respecto a la prescripción de multas laborales, dando cuenta que el Dictamen 024731N19 de 12 de septiembre de 2019 emitido por la Contraloría General de la República, reconsideró la jurisprudencia señalando que en materia de prescripción resultaban aplicables las normas del derecho común, esto es la regla general en materia de prescripción 5 años.

Así las cosas, los argumentos planteados por la autoridad administrativa y que fundan el rechazo de la reconsideración respecto de la multa signada con el Número Dos, no adolecen de error de hecho ni de derecho, teniendo a la vista el tenor de los dictámenes expuestos; la fecha de la infracción y de la imposición de la multa sub-iudice.

Por estos mismos argumentos, se desestimaré la alegación en torno a la prescripción de la multa número uno. Ahora bien, respecto a la remuneración líquida garantizada en los contratos de trabajo, esta juez coincidiendo con la autoridad administrativa, entiende que lo garantizado es el pago de las remuneraciones en la forma establecida en el contrato de trabajo, por lo que el reclamante incurrió en la infracción sancionada como Multa N° 1, no obstante aquello, habiendo reconocido la autoridad un error no esencial respecto del Sr. Benitez los meses de abril y junio de 2022, se accederá a la solicitud del reclamante en cuanto se rebajará la multa a 7 UTM.

DÉCIMO: Que el resto de la prueba rendida en autos, analizada de conformidad a las reglas de la sana crítica, en nada altera o modifica lo razonado en los considerandos precedentes.

Por lo razonado y, teniendo, además, en consideración lo dispuesto en los artículos 1, 11, 55, 500, 501, 503, 506 y siguientes del Código del Trabajo, se declara:

1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

I.- Que se rechaza la reclamación promovida por PFA SEGURIDAD SPA, RUT 77.066.699-6, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, representada por doña MÓNICA LIBERONA PÉREZ, Inspectora Comunal del Trabajo Norte Chacabuco.

II.- Que se rebaja la Multa N° 1, 13.23.3655.202246-1 a la suma de 7 UTM

III.- Cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RIT I-75-2023.

RUC 23- 4-0459335-8

Dictada por Marlys Welsch Chahuán, Juez destinada del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.

